

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4312-2022
CARATULADO : JAÑA/FISCO DE CHILE - CDE

Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio 1, comparece Luis Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en Pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, Santiago, en nombre y representación de **WALDO JAÑA ARAVENA**, profesor de enseñanza media, domiciliado en Clemente X N°303, comuna de El Bosque, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en Santiago, calle Agustinas 1225, Piso 4, de esta ciudad.

Funda su pretensión en que su representado fue objeto de torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes, lo cual se encuentra recogido en el Registro de la Comisión de Prisión Política y Tortura con el N°12.044.

Relata que a la fecha de la ocurrencia de los hechos era estudiante y secretario de la seccional estudiantil de la Juventud Socialista. Explica que el día 20 de octubre de 1973 fue detenido por Policía de Investigaciones, mientras se encontraba en su lugar de estudios, momento en el cual fue llamado por el Inspector del liceo,-junto a otros estudiantes -, para ser llevados ante el Rector del mismo, quedándose todos en silencio. Acto seguido, los hicieron formarse para ser conducidos a un viejo camión que los llevo hacia un cuartel de Investigaciones donde se les van poniendo nombres y militancia.



Foja: 1

Posteriormente, explica que llegaron militares, les vendaron los ojos y fueron nuevamente llevados al mismo camión para ser conducidos al Cerro Chena. Una vez detenido el camión son bajados de éste, y son golpeados con patadas, combos, culatazos y gritos de “corran huevones”. Al cabo de un rato son conducidos a un subterráneo donde les gritaron “al suelo... ¡silencio!”. Seguidamente, es llevado a un cuarto donde se perciben fuertes olores, lo comienzan a interrogar, lo golpean, le aplican corriente en su cuerpo, razón por la que termina perdiendo el conocimiento; al despertar, siente mucho dolor, sangra por la nariz, y lo tiran entre otras personas que se quejaban y lloraban. Luego, al caminar para ir al baño, siente gente tocando sus hombros que se quejaban horriblemente.

Al cabo de un rato, lo llaman y nuevamente es interrogado y golpeado, sintiendo cada vez menos su rostro, atendidos los fuertes golpes que le daban, y su mandíbula dislocada, cuando de pronto es llamado para subirse al camión, junto a otros detenidos, donde pensó que sería fusilado; lo hacen bajar al cabo de unos minutos de una patada en la espalda y lo dejan ahí, advirtiéndoles que no se sacaran la venda de los ojos; ya era el día 23 de octubre de 1973.

Al sacarse la venda reconoce el Puente del Burro en San Bernardo, y de ahí caminó hacia su hogar, donde lo reciben con cara de preocupación y pena. Su madre le señala en ese momento que había recorrido distintas dependencias sin encontrarlo. Desde ese momento, y durante muchos meses es que dormía entre gritos y alaridos producto de lo vivido. Recuerda que en el Liceo y en el partido nadie lo ayudaba, porque pensaban que él era peligroso. Explica que esa situación duró muchos años; sintió mucha soledad, y que la única persona a su lado era su madre.

Producto de las torturas sufridas por el actor, se le soltaron tres piezas dentales, sufre trastornos del sueño, depresión, ansiedad, siente permanentemente los alaridos de las personas a quien se torturaba, lo que le ha provocado un estrés post traumático de carácter crónico hasta la fecha, de lo que claramente se desprende un perjuicio psíquico, físico y moral, además de un perjuicio material evidente; respecto a los daños sufridos, aunque hayan transcurrido más de 47 años, sostiene que continúa con



Foja: 1

secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido.

Por todo lo anterior, señala que su representado viene en demandar la suma de \$200.000.000.- por concepto de daño moral, la que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de la notificación de la demanda, o en su defecto a lo este tribunal estime conforme a derecho.

Respecto a los fundamentos jurídicos de su acción alude a que el Estado de Chile es civilmente responsable, ya que los autores de los hechos descritos eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Agrega, que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en los hechos de secuestro y tortura ocurridas durante la dictadura militar, mediante distintos instrumentos jurídicos como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura denominado “Informe Valech”, en el cual se reconoce a su representado como víctima. Indica que la Responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo en razón del hecho propio al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos. Agrega que la responsabilidad del Estado se encuentra consagrada tanto en la Constitución Política de 1925 y de 1980, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sostiene que en el caso de autos se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, esto dado que el daño moral se presume, que la acción u omisión correspondió a órganos del Estado a través de sus agentes quienes torturaron a su representado, como se expuso con anterioridad, asimismo el nexo causal entre el daño y la perpetración del delito civil es evidente y finalmente no existen causales eximentes de responsabilidad en favor del Estado.

Adicionalmente explica que atendido los hechos generadores de la responsabilidad demandada tienen además el carácter de violación de Derechos Humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad a los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional



Foja: 1

se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “*el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales*” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional. De esta manera, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar el derecho interno. Agrega que el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad por esta clase de hechos y aquella no se limita a lo penal, lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho e los Tratados.

Por último, arguye que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, que debe repararse toda clase de daño causado, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2329 del Código Civil, alcanzaría al ya nombrado daño moral. Añade que la indemnización del daño moral está actualmente reconocida en forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia, y procede a citar fallos en este sentido.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile ya individualizado y solicita que, en definitiva, se condene a la demandada a pagar a título de daño moral la suma de \$200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o el monto que el tribunal estime ajustado a derecho, la equidad y el mérito de autos, con costas.

A folio 8, consta notificación personal subsidiaria de la demandada, con fecha 31 de mayo de 2022.

A folio 9, la demandada contesta el libelo enderezado en su contra, pidiendo su rechazo. Previa síntesis de los hechos de la demanda, opone las excepciones de reparación integral, y en subsidio de ésta, la prescripción.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, alega la improcedencia de la pretensión de la actora, porque ya habría sido indemnizado. Principia efectuando una relación del marco general de las reparaciones ya otorgadas, dentro de la denominada “Justicia transicional”,



Foja: 1

indicando que dentro de un concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como Programas de Reparación. Estos programas incluirían beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, según quedó plasmado en la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas, las cuales describe en extenso. Añade que existe identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, puntualizado que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables, por lo que las pretensiones acá indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Subsidiariamente, como fuere dicho con antelación, deduce excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo. Funda su defensa en que conforme al relato de la parte demandante, la detención ilegal y tortura que sufrió abarcó el período comprendido entre el 20 al 23 de octubre de 1973, por lo que, suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 31 de mayo de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil. Así las cosas, concluye que el plazo de 4 años establecido por la norma citada ha transcurrido con creces. Sin perjuicio de ello, y para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil,



Foja: 1

fundada en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles ejercidas en este pleito, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Refrenda su defensa con jurisprudencia y normas de derecho internacional, señalando particularmente que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, procede el rechazo de la demanda por la prescripción de la acción civil.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, viene en formular las alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido, que se expondrán a continuación.

Sostiene que tratándose del daño puramente moral, la finalidad de restablecimiento del equilibrio destruido por el hecho ilícito no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, por cuanto el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y en tanto la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba, razón por la cual la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

De tal forma, y en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción opuestas, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, conforme a las leyes de reparaciones N°19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Además, respecto de los intereses y reajustes, postula su improcedencia, toda vez que si bien la actora solicita su pago desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de las sumas



Foja: 1

indemnizatorias, a la fecha de interposición de la demanda de autos, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no existe obligación alguna de indemnizar de parte de su representada, no existiendo de esta forma suma alguna que reajustar. Del mismo modo, esgrime respecto de los intereses que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de una sentencia. Por lo anterior, concluye que en el hipotético caso en que se acogieren las acciones de autos y se condenare a su representado al pago de una suma indemnizatoria, sus reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

A folio 16 y 18, se evacuan los trámites de réplica y dúplica, respectivamente.

A folio 19, se recibió la causa a prueba.

A folio 35, la demandada formuló observaciones a la prueba.

A folio 37, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don **WALDO JAÑA ARAVENA** interpuso demanda de indemnización de perjuicios, en procedimiento de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, la demandada, contestando la acción dirigida en su contra, solicita su total rechazo, con costas, por los fundamentos expresados precedentemente.

TERCERO: Que, en apoyo de su pretensión, la parte demandante produjo la siguiente prueba.

Instrumental.

A folio 28:

1.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.



Foja: 1

2.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad

3.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-

4.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

A folio 29:

6.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1, del mes de noviembre de 2004.

7.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que don Waldo Jaña Aravena figura con el número 12.044, en página 299.

8.- Copia de antecedentes de don Waldo Jaña Aravena del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura.

9.- Certificado de nacimiento de mi representado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

A folio 30:

10.- Informe psicológico “evaluación de daño asociado a violencia política en dictadura”, respecto del paciente don **Waldo Jaña Aravena**, datado el 11 de noviembre de 2022, emitido por don Cristian Mauricio Vilches Guerra, Psicólogo Clínico del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud a los afectados por Violaciones a los Derechos Humanos “PRAIS” de Servicio de Salud Metropolitana Sur.

CUARTO: Que, a su turno, la parte demandada no rindió prueba.



Foja: 1

QUINTO: Que, entrando al fondo del asunto discutido en autos, que versa sobre el daño moral que habría sufrido el demandante de autos, en relación con su detención y torturas en manos de agentes del Estado, y la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por tales hechos, es necesario determinar la existencia de los elementos que configurarían dicha responsabilidad.

En dicho sentido, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron numerosos casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los Derechos Humanos y esenciales de personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior, ha sido reconocido por diversos tribunales que han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas, cuyas ideas o actividades, contravenían las órdenes dadas e impartidas por el gobierno de aquel entonces.

A mayor abundamiento, tales hechos no han sido discutidos por la partes, y por tanto, se trata de hechos pacíficos, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito, y conforme al mérito de los instrumentos descritos en el considerando tercero, y así como a lo contenido en respuesta a los oficios descritos, a los que se les otorga valor probatorio, según su naturaleza, no objetados ni impugnados, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil, está acreditado que el actor fue víctima de torturas, vejámenes, y diversos maltratos cometidos por Agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos.

Ahora bien, en cuanto a la imputación de responsabilidad estatal, a la luz de tales antecedentes, ésta se configura claramente, lo cual fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus Agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y especialmente lo consignado en su inciso final, al disponer que la infracción de esta norma



Foja: 1

generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en las reparaciones simbólicas otorgadas por la Ley N°19.123, y otros cuerpos normativos, a las demandantes de autos.

SEXTO: Que, asentada la responsabilidad del Estado en cuanto agente que causó violaciones a los Derechos Humanos del demandante, corresponderá hacerse cargo de las defensas esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar tal responsabilidad, sino que dicen relación con la pretensión de reparación del actor por los vejámenes de que fue objeto por la vía de la indemnización de perjuicios, y/o en cuanto a la oportunidad en que se solicita el resarcimiento.

SÉPTIMO: Que, respecto de lo anterior, el Fisco de Chile debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, alegó como defensa y excepción, en primer lugar, que el demandante habría obtenido una reparación integral de sus perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, por medio de la entrega de una pensión no contributiva como exonerado político pagadera por la Dirección de Previsión de Carabineros, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los Derechos Humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras.

Resulta necesario tener en consideración, que la acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado



Foja: 1

incoada en autos tiene por objeto reparar a quienes sufran perjuicios como consecuencia del actuar de funcionarios estatales, y en este sentido, es nuestro derecho interno el que regula la indemnización en sede extracontractual de todo daño que sufra una persona, sin distinción alguna, sin perjuicio de la necesidad de probar, en cada caso, la existencia efectiva de los perjuicios que sean consecuencia del hecho dañoso, especialmente según el estatuto de las normas contenidas en los artículos 2.314, 2.316 y 2.329 del Código Civil.

En este orden de ideas, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado constituyen, a juicio de esta sentenciadora, beneficios sociales en dinero, tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile, referentes a la dignificación de las víctimas, la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas y la obtención, en definitiva, de una democracia plena y paz social. En consecuencia, las reparaciones en dinero, recibidas por el actor hasta la fecha y que serán percibidas por él vitaliciamente como pensión mensual, si bien constituyen una reparación e indemniza en parte a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, se basan en estándares y criterios objetivos, en forma genérica, aplicándose sin distinción o correlación necesaria con el daño efectivamente padecido por cada persona en particular, por lo que es posible concluir que los daños causados en su totalidad, no han sido efectiva y completamente reparados, especialmente el daño moral que puede haber causado la acción de agentes del Estado en una persona en particular.

Ahora bien, en cuanto a aquellas reparaciones denominadas como reparaciones “simbólicas”, estas obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar a los beneficiarios de las pensiones de las citadas leyes, no resultan vinculantes para la procedencia de la indemnización civil, la que debe determinarse por sentencia judicial, razón por la cual se desestimaré completamente esta defensa como reparación integral del daño.

OCTAVO: Que, en segundo lugar y en forma subsidiaria, la demandada planteó como defensa y opuso como excepción, la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber



Foja: 1

transcurrido a su juicio, con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, contados desde la fecha en que habría ocurrido la detención, privación de libertad y torturas sufridas por el demandado, entendiendo suspendida la prescripción, durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de lo anterior, invocó el plazo de 5 años contemplado en el artículo 2.515 del Código de Bello, desde que se hizo exigible el derecho a indemnización, en ambos casos hasta la fecha de notificación de la demanda, hecho acaecido el día 31 de mayo de 2022. Refuerza su defensa afirmando que el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existiría tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad respecto del caso sublite.

En tal escenario, la naturaleza de la acción pretendida **excede con creces el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva** de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico **insuficiente** para la **entidad del ilícito** en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, por lo que será necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnarían con la obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de Derechos Humanos incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5°.

En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que permitan eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado a las víctimas. Esto se



Foja: 1

aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que, de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así, que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los Derechos Humanos se encuentra en principios y normas de derecho internacional de Derechos Humanos.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la Carta Política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

En suma y, a juicio de esta sentenciadora, **la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible**, por los antecedentes normativos citados, razón por la cual se rechazará la excepción de prescripción extintiva deducida.

NOVENO: Que, habiéndose desechado las excepciones opuestas y estableciéndose la responsabilidad civil estatal, y esbozándose la idea sobre la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N°19.123 entre otras, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el considerando previo, debe analizarse el fondo de la acción deducida, esto es, la procedencia de indemnizar al demandante por



Foja: 1

el daño moral producido ocasión de los apremios ilegítimos y violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las alegaciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuestas por la demandada.

DÉCIMO: Que, en reiterada jurisprudencia, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha definido el daño moral como la *lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable* a otra.

Que, en este sentido, de la prueba descrita a continuación, esto es, instrumento signado bajo el numeral 8) del motivo tercero precedente, el cual será valorado conforme los artículos 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil y 1702 del Código Civil, se tendrá por establecido que don Waldo Jaña Aravena fue detenido junto a otras personas, el 20 de octubre de 1973, y liberado el 23 de octubre del mismo año, mientras se encontraba estudiando en el Liceo de Hombres de San Bernardo.

Así las cosas, existió una repercusión efectiva en la vida del demandante, en la forma que manifestó en su libelo, padeciendo los daños que da cuenta el Informe Psicológico, rolante a folio 30 de autos y signado bajo el numeral 10) del motivo tercero, instrumento que no fue objetado, ni desvirtuado por prueba rendida en contrario por el demandado Fisco de Chile, denominado “evaluación de daño asociado a violencia política en dictadura”, respecto del paciente don Waldo Jaña Aravena, emitido con fecha 11 de noviembre de 2022 por don Cristian Mauricio Vilches Guerra, Psicólogo Clínico, el cual será valorado conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1712 del Código Civil, se concluirá que el actor sufrió daños morales, derivados de haber sido víctima de detención y torturas por personal de Policía de Investigaciones y Militares, cuando era solo un estudiante de Liceo, siendo detenido el día 20 de octubre de 1973.



Foja: 1

Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención ubicado en Cerro Chada, donde recibió diversos golpes de pies, puños, culatazos y aplicación de electricidad en distintas partes de su cuerpo. En dicho lugar, lo habrían mantenido detenido hasta el día 23 de octubre del mismo año, cuando fue dejado en libertad, siendo abandonado con los ojos vendados en inmediaciones de dónde se encontraba recluso.

En definitiva, mediante la prueba antes descrita y valorada en la manera señalada, será posible tener por establecido que don Waldo Jaña Aravena fue detenido y torturado física y psicológicamente, por la aplicación de violencia extrema por Agentes del Estado de Chile, acarreándole consecuencias psicológicas que producen efectos en él hasta la actualidad. A mayor abundamiento, el hecho de haberse provocado un daño moral como el invocado por el actor con ocasión de los apremios ilegítimos en la especie sufridos se perfila como una consecuencia probable y directa de la actuación de los agentes Estatales, atendidas sus circunstancias y características, estableciéndose por tal circunstancia el vínculo o nexo causal entre el daño y el agente causante de éste.

UNDÉCIMO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el demandante, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de los ilícitos, a fin de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima.

Cabe hacer presente que este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por la demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de éstos, encontrándose entre ellos quien acciona bajo estos autos.



Foja: 1

Así las cosas, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a este demandante durante tan largo tiempo, corresponde ahora que le devuelvan a su amparo y morigere en cierta extensión los efectos perniciosos de su obrar, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

En consecuencia, esta magistrada tomará en especial consideración la edad que tenía el demandante al momento de la ocurrencia de los hechos vulneratorios, es decir, estudiante del Enseñanza Media, que fue detenido junto a otros compañeros mientras se encontraba en el Liceo donde estudiaba. También se tomarán en consideración las horribles circunstancias de su detención, las que no sólo se refieren a la aplicación de violencia directa sino también a tortura psicológica, pues mientras se encontró detenido al demandante le era posible escuchar las torturas físicas a las que eran sometidos otros prisioneros. También se tomará en especial consideración el impacto de los hechos ocurridos en la vida del demandante, según lo informado en su evaluación psicológica.

De esta forma, se explica en el Informe Psicológico mencionado en los párrafos anteriores que *“la detención política y los episodios de tortura de la cual fue víctima don Waldo Jaña Aravena afectó de modo **determinante** la vida del entrevistado configurando un quiebre importante en su proyecto vital”*.

Asimismo, se menciona en el referido Informe que el demandante se vio dificultado en continuar normalmente sus estudios, sufriendo discriminación, estigmatización, lo que le produjo aislamiento social, deteriorándose sus vínculos colectivos y afectivos.

Por otra parte, se lee: *“El entrevistado junto a su grupo familiar al estar expuesto a la vivencia de diversas experiencias traumáticas de tipo represivas, conforma una evidente politraumatización que repercute en sus dinámicas interpersonales viéndose afectada su salud y su estabilidad emocional durante un extenso período de tiempo”*.

Por último, se consigna que *“como resultado de las diversas situaciones que vivenció el entrevistado, es posible distinguir la presencia de una traumatización extrema, la cual se caracteriza por desbordar la estructura psíquica de los sujetos, dentro de un contexto sociopolítico en*



Foja: 1

donde son exterminados diversos miembros de la sociedad. Este hecho resulta especialmente difícil de elaborar para don Waldo”.

De esta forma, a la luz de los antecedentes que obran en autos y que fueren descritos y valorados con anterioridad, se fijará prudencialmente la indemnización de perjuicios en la suma de **\$70.000.000 (setenta millones de pesos)**, la que deberá pagar el Estado al demandante por concepto de daño moral.

Al respecto, cabe tener presente numerosa jurisprudencia reciente de Tribunales superiores de Justicia que, sin ser vinculante para este tribunal, en circunstancias análogas, han fijado indemnizaciones de montos similares.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la suma referida en el considerando precedente se pagará reajustada de acuerdo a la variación del I.P.C. desde la fecha en que quede firme la condena y el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto se acogerá la excepción deducida por la demandada. Junto a lo anterior, tal suma deberá pagarse aumentada con los intereses corrientes aplicados desde la fecha en que quede firme la condena y el pago efectivo de la indemnización, todo conforme a la liquidación que se practicará oportunamente en Secretaría de este Tribunal.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a las costas de la causa cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1.700, 1.706, 1.71, 2314, 2.316, 2.329, 2.332, 2.492, 2.514, 2.515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

I.- Que, se **RECHAZAN** las excepciones deducidas por la parte demandada, tanto en su petición principal como subsidiaria.



Foja: 1

II.- Que, se **ACOGÉ** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida a folio 1 de autos, por don **Waldo Jaña Aravena**, y se condena a la demandada a pagar al demandante la suma de **\$70.000.000.- (setenta millones de pesos)**, por concepto de daño moral, cantidad debidamente reajustada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, y aumentada con los intereses corrientes, calculados desde la fecha en que quede firme esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, todo según liquidación que se practicará en su oportunidad.

III.- Que, **NO SE CONDENA** en costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

C-4312-2022

Pronunciada por doña Lorena Isabel Cajas Villarroel, Jueza Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintitrés.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MDGCXJGFQCZ

